

**I**

El Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacía General del Estado trae causa de la reciente anulación por aspectos procedimentales del Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, la cual determina la conveniencia de aprobar un régimen jurídico de la organización de la Abogacía del Estado acorde con la estructura orgánica que sigue previendo el Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, y que ha resultado satisfactoria, y continuar avanzando en la transformación iniciada en el año 2022. Asimismo, se ha considerado oportuno que el presente Reglamento refleje no solo lo previsto en el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, sino que igualmente contenga la actual regulación del Real Decreto 649/2023, de 18 de julio, integrando en un único cuerpo normativo todas las disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de la Abogacía General del Estado.

En cuanto se refiere a su contenido el proyecto consta de un preámbulo, un artículo único por el que se aprueba el Reglamento, seis disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una disposición derogatoria y dos finales. El Reglamento a su vez se divide en dos Títulos que constan de tres Capítulos cada uno de ellos, con un total de 97 artículos. El Título I de “Organización de la Abogacía General del Estado” y el segundo de “Funcionamiento de la Abogacía del Estado”. En cuanto se refiere al primero se divide en tres capítulos, capítulo I Estructura Orgánica de la Abogacía General del Estado (artículos 1-35), capítulo II Régimen de la Inspección de los Servicios de la Abogacía General del Estado (artículos 36-40), capítulo III Disposiciones relativas al personal de la Abogacía General del Estado (artículos 41-53). El título II se divide a su vez en otros tres capítulos, capítulo I Régimen de la función consultiva desarrollada por la Abogacía General del Estado (artículos 54-64), capítulo II Régimen de la función contenciosa desarrolla por la Abogacía General del Estado (artículos 65-92), capítulo III Asistencia jurídica a

los órganos constitucionales y entidades integrantes del sector público institucional estatal (artículos 93-97).

La norma proyectada deroga los artículos 1 a 9, 11, 12, 13, 19 y 61 a 76 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio; así como el Real Decreto 649/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en el ámbito de la Abogacía General del Estado y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.

En cuanto a su tramitación destaca la realización del trámite de audiencia e información pública, con omisión del de consulta pública, así como su tramitación administrativa urgente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de julio de 2024.

Finalmente, en materia de impactos no afecta a cargas administrativas, ni a los Presupuestos Generales de la Administración del Estado, ni tampoco registra otro tipo de impactos que deban ser considerados.

## II

Centrándonos en el análisis del proyecto normativo objeto de esta consulta desde el punto de vista de la protección de datos personales debe indicarse que, dado su reconocimiento como un derecho fundamental, estos datos de carácter personal (que son en realidad cualquier dato o información de una persona física identificada o identificable) no pueden utilizarse sin más, sino que deben respetarse unas reglas sobre su utilización, las cuales indican cuándo y cómo pueden ser tratados.

En el ámbito internacional, las primeras iniciativas surgieron en el marco del Consejo de Europa, así, a modo de ejemplo, la Resolución 1968 sentó las bases de unos principios que regulaban el tratamiento de la información de datos de carácter personal. Desde entonces hasta nuestros días se ha ido sucediendo de manera vertiginosa la producción de normas centradas en esta materia tanto en los ámbitos internacional y europeo, como nacional y autonómico. En este contexto las principales normas en materia de privacidad integrantes de nuestro ordenamiento jurídico son, en síntesis, las siguientes:

1. Reglamento general de protección de datos personales, 2016/679 del Parlamento y del Consejo, 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
2. Directiva 2016/680, relativa al tratamiento para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales.
3. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales, y que sustituye a la anterior LOPDCP de 1999, mediante la cual se adapta el marco español al Reglamento europeo y se desarrollan algunos de sus aspectos.
4. Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

Estas normas establecen el marco normativo básico en materia de protección de datos de carácter personal sin perjuicio de su ulterior desarrollo y concreción por las normas sectoriales aplicables en cada caso.

Dicho lo cual, en relación con la adecuación de este proyecto normativo al marco jurídico actual en materia protección de datos personales debe indicarse que si bien la norma proyectada, por su propia naturaleza, consiste en una norma de carácter eminentemente orgánico y funcional, conviene hacer notar que todos los tratamientos que se lleven a cabo derivados del ejercicio de las funciones y de la actividad de la Abogacía General del Estado deberán necesariamente observar el ut supra descrito marco normativo.

Pese a ello, en la norma proyectada no se ha observado indicación alguna en relación con la normativa de protección de datos personales, sin perjuicio de que, como se ha indicado ut supra, tanto en la gestión ordinaria interna de la Abogacía General del Estado, como en las funciones específicas que le corresponden pudieran producirse tratamientos de datos de carácter personal.

Comoquiera que no consta incorporada hasta la fecha una referencia expresa al respeto de la normativa existente en materia de privacidad conviene recordar que el artículo 4.2 del RGPD considera como tratamiento: *“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación,*

*adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”.*

Asimismo, en relación con la actividad de la Abogacía General del Estado con proyección en el ámbito internacional, como es el caso por citar un ejemplo de la llamada a ser desarrollada por la Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales, debe recordarse la necesidad de que en el caso de llegar a producirse transferencias internacionales de datos personales, se observe lo indicado a este respecto en el RGPD, que dedica a estas cuestiones su Capítulo V “Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales”.

Por lo expuesto, a juicio de este Gabinete Jurídico resulta incuestionable la necesidad de que en el proyecto normativo objeto de estudio, y sin perjuicio de que como se ha dicho anteriormente sea una norma de carácter eminentemente orgánico y funcional, se introduzca una mención específica a la protección de datos de carácter personal.

En consecuencia, resultaría adecuado incorporar un precepto específico bajo la rúbrica “Tratamiento de datos personales”, cuya ubicación sistemática a la vista de la estructura del presente proyecto normativo podría incorporarse como disposición adicional sexta, desplazando la actual disposición adicional sexta al séptimo lugar, o si se prefiere podría ser incorporada como nueva disposición adicional séptima; y cuyo contenido se sugiere que podría ser el siguiente:

**“Disposición adicional XXX. Tratamiento de datos personales.**

**Todos los tratamientos de datos personales realizados por la Abogacía General del Estado en el ejercicio de sus competencias se harán de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo”.**

De esta forma, mediante la incorporación del referido nuevo precepto al proyecto normativo objeto de este informe, en la Abogacía General del Estado quedaría con carácter general salvaguardada la previsión del respeto a esta normativa; todo ello con independencia de que dicho respeto habrá de ser garantizado con las medidas adecuadas y necesarias según los tratamientos que se lleven a cabo en cada caso en particular.

### III

Siguiendo con el análisis del referido proyecto normativo desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal, y partiendo de la consideración de la Abogacía General del Estado como responsable del tratamiento, se considera también adecuada la incorporación a su articulado de una referencia expresa a la posibilidad de todos los Abogados del Estado de acceder al contenido íntegro de los expedientes contenidos en sus bases de datos en la condición de personas autorizadas para tratar datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado, y sin la consideración de tercero, todo ello de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 4.7) y 10) del RGPD.

A tales efectos se recomienda igualmente por este Gabinete Jurídico la incorporación de un nuevo precepto, que a la vista de la sistemática de esta norma podría ubicarse como nuevo artículo 42.bis, bajo la rúbrica “Personas autorizadas para tratar los datos personales”, cuyo contenido se sugiere que podría ser el siguiente:

**“ Artículo 42.bis. Personas autorizadas para tratar datos personales.**

**Todos los Abogados del Estado integrantes de la Abogacía General del Estado serán considerados personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado”.**

### IV

Por último, deben recordarse por su conexión con la protección de datos personales las previsiones contenidas en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico

del Sector Público, en materia de Relaciones electrónicas entre las Administraciones (artículos 155-158). A este respecto, se considera oportuno dejar constancia en este informe de lo previsto en el artículo 156.2 acerca del Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad, regulado en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, cuyo artículo 3 bajo la rúbrica “Sistemas de información que traten datos personales” dispone lo siguiente:

*“1. Cuando un sistema de información trate datos personales le será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o, en su caso, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, el resto de normativa de aplicación, así como los criterios que se establezcan por la Agencia Española de Protección de Datos o en su ámbito competencial, por las autoridades autonómicas de protección de datos, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente real decreto.*

*2. En estos supuestos, el responsable o el encargado del tratamiento, asesorado por el delegado de protección de datos, realizarán un análisis de riesgos conforme al artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos y, en los supuestos de su artículo 35, una evaluación de impacto en la protección de datos.*

*3. En todo caso, prevalecerán las medidas a implantar como consecuencia del análisis de riesgos y, en su caso, de la evaluación de impacto a los que se refiere el apartado anterior, en caso de resultar agravadas respecto de las previstas en el presente real decreto”.*

A la vista de lo cual, debe recordarse, singularmente, que tal y como viene señalando de manera reiterada esta Agencia, existen diferencias

importantes entre la seguridad de la información y la protección de datos de carácter personal, (por todos, Informe 64/2021 sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad), de modo que la seguridad de la información aparece como una obligación más de los responsables y encargados del tratamiento, quienes deberán aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo para los derechos y libertades de los interesados, pero sin que se limite exclusivamente al ámbito de la seguridad de dicha información, en cuanto que la protección de datos personales tiene un ámbito mucho más extenso que abarca, a un conjunto de principios, derechos, medidas y garantías mucho más amplio, entre ellas medidas sobre el concepto del tratamiento, políticas de protección de datos, protección de datos desde el diseño y por defecto o notificación y comunicación de brechas de datos personales, bajo la garantía administrativa de las “autoridades de control” previstas en dicha normativa.

Con esta referencia se pretende únicamente llamar la atención sobre la necesidad de extremar las precauciones cuando se pretenda la implantación o utilización de un sistema de información que trate datos de carácter personal, supuesto en el que deberá garantizarse el pleno cumplimiento tanto del Esquema Nacional de Seguridad como de las obligaciones que se asumen por parte de responsables y encargados del tratamiento.